

# PARAGUAY

## RESUMEN EJECUTIVO

Paraguay es una república constitucional multipartidaria. En 2008, Fernando Lugo, de la Alianza Patriótica para el Cambio, ganó la presidencia en unas elecciones que, en conjunto, fueron libres y justas. Las fuerzas de seguridad estuvieron subordinadas a las autoridades civiles.

Los principales problemas de derechos humanos fueron los asesinatos perpetrados por la policía o funcionarios públicos; condiciones duras y en ocasiones potencialmente mortales en las prisiones; interferencia política, corrupción e ineficiencia en el Poder Judicial.

Continuó la discriminación y la violencia contra mujeres, indígenas, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y personas con discapacidades, así como la trata de personas. La explotación del trabajo infantil y las violaciones de los derechos de los trabajadores también siguieron siendo problemas graves.

Hubo impunidad para los oficiales de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos que cometieron abusos.

### **Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometido a:**

#### **a. Privación arbitraria o ilícita de la vida**

El gobierno no cometió ningún asesinato por motivos políticos, pero hubo acusaciones de un asesinato de ese tipo cometido por un miembro de alto cargo de uno de los principales partidos políticos.

El 4 de marzo, tres agresores desconocidos mataron al político del partido Asociación Nacional Republicana (ANR o partido Colorado) y conductor de un programa de radio, Merardo Alejandro Romero Chávez, en su residencia en Itakyry. Los seguidores de Romero sostuvieron que el asesinato estaba vinculado al compañero del partido Colorado y exintendente, Miguel Ángel Soria, otro candidato opositor a Romero en las elecciones primarias del 13 de marzo para líder local del partido. Al finalizar el año, continuaba la investigación policial, y la fiscalía del caso ordenó la “prisión preventiva” del principal asesor político de Romero, José Valenzuela.

Hubo informes de que algunas fuerzas de seguridad actuaron a título oficial pero sin conocimiento del gobierno o apoyaron el asesinato de personas en su propio beneficio. Algunos de esos informes sostuvieron que los fiscales del gobierno conspiraron para encubrir los asesinatos.

El 21 de agosto, el suboficial Fermín Delvalle Carreras disparó y mató a Rafael Sanabria Amarilla, de 20 años de edad, después de que un control rutero en Hohenau, departamento de Itapúa, detuvo el automóvil en el que viajaban Rafael y sus amigos. Los ocupantes del vehículo fueron obligados a bajarse del automóvil y ponerse de rodillas para cachearlos. Supuestamente, Rafael no opuso resistencia y recibió un tiro en la espalda cuando se encontraba de rodillas. El Ministerio Público acusó de homicidio a Delvalle, y el caso seguía pendiente al final del año.

No se supo de ningún avance en el caso del fiscal Fleitas Ramírez y los cinco agentes de policía arrestados y acusados de matar a Marcos Roberto Carrión en julio de 2010, ni en el caso de 17 agentes de policía acusados del homicidio involuntario de Gustavo Muñoz en agosto de 2010.

### **b. Desaparición**

No hubo informes de secuestros por motivos políticos; sin embargo, la prensa informó de “secuestros exprés” para el cobro de rescate, entre otros, informes de acciones realizadas por policías con ayuda a posteriori de fiscales, lo cual dio lugar en ocasiones a desapariciones no resueltas.

### **c. Tortura y otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante**

La ley prohíbe este tipo de trato y, en términos generales, el gobierno respetó esas disposiciones en la práctica, aunque hubo informes de que algunos agentes del gobierno emplearon estas tácticas. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), integrada por 33 organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones cívicas, hizo varias denuncias de tortura policial y otros abusos cometidos a fin de obtener confesiones o de intimidar a los detenidos. El 31 de enero, según se afirma, dos agentes de policía secuestraron y torturaron a Cipriano Encina Casco y a su esposa, Reina Troche, cerca de Ciudad del Este. Encina sostuvo que los agentes los golpearon y asfixiaron con bolsas de plástico mientras les exigían dinero y les robaban su automóvil. La pareja informó que, posteriormente, recibieron amenazas de muerte de los agentes contra los cuales

habían presentado una denuncia. Al final del año, el caso seguía siendo investigado por el Ministerio Público.

### **Condiciones en las prisiones y los centros de detención**

Las condiciones en las prisiones y los centros de detención siguieron siendo inferiores a las normas internacionales. Los problemas más graves fueron: violencia, maltrato, hacinamiento, personal insuficiente y mal capacitado, deterioro de la infraestructura, condiciones de vida anti-higiénicas, normas deficientes de seguridad alimentaria y atención médica y psicológica insuficiente. El 3 de enero, el Ministro de Justicia y Trabajo (MJT) anunció que, en 2012, el gobierno comenzaría a cerrar la prisión más grande del país, Tacumbu, y a transferir a los presidiarios a otras prisiones.

Los 15 centros penitenciarios del país albergan a más de 6.300 reclusos, 20% más que la capacidad de diseño de 5.300. La penitenciaría de Ciudad del Este, diseñada con una capacidad para 300 reclusos, tiene más de 650. En todas las penitenciarías excepto dos, se mantuvo a las personas detenidas bajo prisión preventiva junto con los prisioneros convictos. Las mujeres representaron cerca del 5% de la población encarcelada, y las condiciones penitenciarias para hombres y mujeres fueron similares.

Las prisiones carecieron de controles de seguridad adecuados. Con frecuencia, los reclusos portaron armas y cometieron actos de violencia, especialmente contra otros reclusos. En noviembre, el Ministerio de Justicia y Trabajo registró 18 lesiones y la muerte de 17 prisioneros que se encontraban bajo custodia, algunos de los cuales fueron asesinados por otros reclusos. Hubo casos de reclusos que llevaron a cabo actividades ilícitas en forma de soborno y conspiración con los guardias carcelarios. En ocasiones, las visitas tuvieron que ofrecer sobornos para poder reunirse con los prisioneros, y hubo obstáculos para que los reclusos contaran con la representación efectiva de defensores públicos.

Los prisioneros tuvieron acceso a agua potable. Se cuenta con defensores dedicados a asuntos penitenciarios que son moderadamente eficaces. No se tomaron medidas importantes para el mejoramiento del sistema de registros ni para el uso de alternativas a la sentencia.

Los prisioneros pudieron recibir visitas y se les permitió practicar su religión. Aunque en teoría los prisioneros podían presentar denuncias, no queda claro que las denuncias presentadas estuvieran exentas de censura en todos los casos. Las

autoridades investigaron denuncias creíbles de condiciones inhumanas y tomaron medidas para mitigarlas dentro de las limitaciones de recursos disponibles.

En septiembre de 2010, los fiscales acusaron al personal de la prisión de Tacumbu en Asunción de complicidad en un caso de pornografía infantil producida por reclusos. Estos y otros cargos presentados contra el exdirector y el jefe de seguridad de la prisión seguían pendientes al concluir el año.

Aunque el MJT asignó a los menores de edad convictos de delitos juveniles a cinco establecimientos correccionales para jóvenes en el país, algunos de estos delincuentes cumplieron sus condenas en prisiones para adultos. En general, las condiciones de vida en las instalaciones para jóvenes fueron mejores que las de las prisiones para adultos.

Con frecuencia, el personal de la prisión y los líderes no autorizados de los prisioneros separaron a los reclusos según su capacidad para pagar por mejores condiciones de vida. Los reclusos pudieron mejorar sus habitaciones mediante el pago de una cuota que varió entre 20.000 y 50 millones de guaraníes (de \$5 a \$12.500 dólares, aproximadamente).

El gobierno permitió la supervisión independiente de las condiciones penitenciarias, y concedió a los medios de información, grupos de derechos humanos y representantes diplomáticos el acceso a las prisiones coordinado previamente con el MJT. Durante el año, representantes de los medios de información, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras ONG realizaron visitas a las prisiones.

#### **d. Arresto o detención arbitrarios**

La ley prohíbe el arresto y la detención sin una orden de aprehensión firmada por un juez, y estipula que las personas detenidas deben comparecer ante un juez en un plazo de 24 horas para una audiencia inicial. Hubo algunos informes de arrestos y detenciones arbitrarias de personas sin una orden de aprehensión.

#### **Función de la policía y del aparato de seguridad**

La Policía Nacional, subordinada al Ministerio del Interior, mantiene el orden público, protege los derechos y la seguridad de las personas y entidades y sus bienes, previene e investiga los delitos y cumple las órdenes provenientes del Poder Judicial y los funcionarios públicos. Las Fuerzas Armadas, bajo la autoridad

del Presidente, protegen la integridad territorial del país y defienden a las autoridades legalmente constituidas. El Ministerio de Defensa Nacional, también bajo la autoridad del Presidente pero fuera de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, maneja ciertos asuntos en materia de defensa. La ley autoriza a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y a la Secretaría Antiterrorista, ambas bajo la autoridad del Presidente, para hacer cumplir las leyes y mantener el orden en lo que se refiere al narcotráfico y el terrorismo.

Las autoridades civiles mantuvieron generalmente el control sobre las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no coordinaron eficazmente las actividades de aplicación de la ley. Aunque el gobierno cuenta con mecanismos para investigar y castigar la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, hubo informes de participación policial en delitos que no fueron castigados. En 2010, 41 agentes de policía fueron despedidos debido a delitos diversos. De enero a abril, las autoridades despidieron a 58 agentes de policía por conducta delictiva.

Los 23.000 miembros de las fuerzas de la Policía Nacional tuvieron capacitación deficiente y carecieron de financiamiento adecuado. Asimismo, predominó la corrupción entre ellos, protegida en gran parte por la impunidad. En todo el país, hubo incidentes frecuentes de participación policial en homicidios, tráfico de drogas y armas, robos de automóviles, asaltos, extorsiones y secuestros. Estos abusos fueron particularmente generalizados en Ciudad del Este y en otros lugares en la frontera con Brasil. En 2010, la policía registró 160 denuncias formales contra agentes de policía, la mayoría por supuesto maltrato físico o abuso de poder. En la mayoría de los casos, estas denuncias no fueron resueltas. Algunos fiscales conspiraron rutinariamente con la policía y las organizaciones delictivas para extorsionar y chantajear a las personas.

En noviembre de 2010, el cadete militar Antenor Rafael Saiz Ribes presentó una denuncia contra la Academia Militar en la que sostenía que fue golpeado y agredido verbalmente como parte de un ritual común para novatos. Aunque el Presidente sustituyó posteriormente al comandante del cuerpo de cadetes, otras investigaciones se vieron obstaculizadas por la falta de cooperación de las autoridades militares, quienes hicieron caso omiso de una citación para presentar testimonio el 18 de enero.

El gobierno continuó los intentos por disminuir y castigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía. El 28 de enero, la Policía Nacional adoptó un manual que describe las circunstancias en las que la policía puede hacer uso de la fuerza y, el 9 de agosto, el comandante de la Policía Nacional aprobó

normas que hacen hincapié en la transparencia y el respeto de los derechos humanos en el proceso disciplinario. En marzo, el Ministerio Público estableció una unidad especial para recibir, investigar y enjuiciar abusos de los derechos humanos. La unidad asumió los 850 casos abiertos actualmente y recibió órdenes de manejar las futuras denuncias de violaciones de los derechos humanos. Al final del año, no hubo ningún informe de enjuiciamientos importantes logrados.

### **Procedimientos para arrestos y trato durante la detención**

La policía puede arrestar a las personas cuando lo autoriza una orden judicial o procesal, o cuando descubre un delito en curso. La ley dispone que, después de hacer un arresto, la policía tiene hasta seis horas para notificar al Ministerio Público. A partir de ese momento, el Ministerio Público tiene hasta 24 horas para notificar a un juez de sus intenciones de llevar el caso a juicio. La ley dispone también que los detenidos tienen derecho a una determinación judicial oportuna acerca de la legalidad de la detención y, aparentemente, las autoridades respetaron este derecho en la práctica e informaron de inmediato a los detenidos de los cargos contra ellos

Además, la ley permite a los jueces emplear “medidas sustitutivas”, como el arresto domiciliario y la fianza, en los casos de un delito grave. En los casos de delitos menores, los jueces establecieron a menudo fianzas relativamente altas; muchos acusados indigentes no pudieron pagar la fianza, mientras que quienes tenían conexiones políticas pagaron en ocasiones fianzas mínimas o no pagaron fianza.

La ley concede a los acusados el derecho a un abogado, y el gobierno proporciona representación legal a los acusados indigentes. La calidad de la representación disminuyó debido al número de casos asignados a los defensores públicos. El gobierno permitió a los acusados contratar abogados pagados por ellos mismos. Los detenidos tuvieron acceso a sus familiares.

Prisión preventiva: La ley permite la detención sin juicio hasta que el acusado cumpla la sentencia mínima del supuesto delito. Cerca del 70% de los prisioneros permanecieron en prisión preventiva durante el período de este informe. La ley estipula que la prisión preventiva puede variar de seis meses a cinco años, según el tipo de delito. En la práctica, la detención fue arbitrariamente prolongada, y algunos detenidos permanecieron en prisión más tiempo que el máximo permitido. Las ineficiencias y la corrupción del Poder Judicial causaron demoras importantes en los juicios y prolongaron la prisión preventiva.

### **e. Denegación de un juicio público imparcial**

La Constitución establece una judicatura independiente; sin embargo, en la práctica, la interferencia política comprometió seriamente esa independencia. Los procesos de selección de jueces fueron muy politizados, y hubo puestos específicos asignados normalmente por partido político. Los tribunales siguieron siendo ineficientes y sujetos a corrupción. Los políticos y las partes interesadas intentaron de forma rutinaria influir en las investigaciones y presionar a jueces y fiscales. También hubo acusaciones frecuentes de que los jueces y fiscales pidieron sobornos para retirar o modificar los cargos contra los acusados.

### **Procedimientos judiciales**

La Constitución contempla el derecho a un juicio imparcial, lo cual el Poder Judicial cumplió sólo de nombre por medio de prolongados procesos judiciales. El informe de 2009 del Centro de Estudios Judiciales reveló que sólo el 48% de los casos iniciados en 2008 fueron resueltos en menos de un año. Los acusados acaudalados o bien relacionados gozaron de impunidad mediante conspiración con los jueces, y a menudo presentaron solicitudes falsas que ralentizaron el proceso legal hasta que sus casos prescribieron.

La ley dispone el uso de tribunales de tres jueces en lugar de jurados para decidir un procedimiento, determinar la culpabilidad o inocencia e imponer sentencias. Es necesaria la opinión mayoritaria para declarar la culpabilidad. Un juez preside los casos civiles y los casos de delitos menores con penas máximas que no excedan de dos años en prisión.

Todos los juicios son abiertos al público. La ley exige que los fiscales presenten cargos contra las personas acusadas en un plazo de 180 días después del arresto, pero los fiscales y defensores públicos del Ministerio Público carecieron de recursos para realizar adecuadamente su trabajo. Los acusados gozan de la presunción de inocencia y del derecho de apelación, y los acusados y fiscales pueden presentar testimonio por escrito de testigos y otras pruebas. Los acusados tienen el derecho de acceder a las pruebas pertinentes a sus casos que tenga el estado.

### **Presos y detenidos políticos**

No hubo informes de presos ni detenidos políticos.

## **Fallos de tribunales regionales de derechos humanos**

En respuesta a la decisión de agosto de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad indígena Xakmok Kasek, el gobierno informó al tribunal en agosto que se estaba preparando un decreto presidencial para revocar la declaración de reserva natural privada de la propiedad en cuestión, lo cual permitiría el cumplimiento con la resolución de transferencia de tierras. Asimismo, se estaban llevando a cabo negociaciones para la compra de tierra.

Durante el año, el gobierno cumplió parcialmente con dos resoluciones de la Corte. En relación con la decisión de 2006 en favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, el gobierno siguió proporcionando compensación monetaria pero no concedió las tierras a la comunidad.

En lo que se refiere al fallo de 2005 en favor de la comunidad indígena Yakye Axa, la comunidad aceptó en principio la compra planificada del gobierno de 37.000 acres aproximadamente de tierras alternativas para el reasentamiento, a fin de reemplazar las tierras ancestrales en las que estaban viviendo los miembros de la comunidad. Posteriormente, el gobierno asignó fondos, identificó esa superficie en el rancho El Algarrobal y, el 10 de diciembre, anunció que se había logrado un acuerdo sobre el precio de compra. La comunidad Yakye Axa convino en ser reubicada en la propiedad El Algarrobal.

## **Procedimientos y recursos judiciales civiles**

Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para presentar demandas para reclamar daños y perjuicios por violaciones de los derechos humanos, o el cese de esas violaciones. Se cuenta con recursos administrativos y judiciales para presuntos agravios, aunque las autoridades casi nunca los concedieron a los ciudadanos. El gobierno tuvo problemas para hacer cumplir las órdenes judiciales.

## **Restitución de propiedades**

Por lo general, el gobierno hizo cumplir las órdenes judiciales relacionadas con la confiscación, restitución o compensación por apropiación de propiedad privada. No obstante, hubo fallas sistémicas. Por ejemplo, los conflictos de tierras de Puerto Casado del año 2000 entre residentes locales y la empresa Victoria S.A., propietaria de la tierra, causaron enfrentamientos periódicos y daños en propiedad

privada, mientras que el gobierno no hizo cumplir las decisiones ni las órdenes judiciales de devolver las tierras ocupadas al propietario de las mismas.

### **f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia**

La ley prohíbe estas acciones y, en términos generales, el gobierno respetó esas prohibiciones en la práctica.

## **Sección 2. Respeto de las libertades civiles, entre otras las siguientes:**

### **a. Libertad de expresión y de prensa**

#### **Estado de la libertad de expresión y de prensa**

La ley dispone la libertad de expresión y de prensa, y en términos generales, el gobierno respetó esos derechos en la práctica. Las personas criticaron al gobierno de manera pública y privada, comúnmente sin represalias ni impedimentos.

Violencia y hostigamiento: Debido a sus publicaciones, los periodistas fueron en ocasiones víctimas de acoso, intimidación y violencia, principalmente por parte de pandillas de narcotraficantes y grupos delictivos ubicados en los departamentos de la frontera con Brasil, pero también de políticos. En mayo, Fermín Jara, redactor del diario *ABC Color*, y los periodistas Carlos Bottino y Samir Sánchez de Radio Parque en Ciudad del Este afirmaron que el gobernador de Alto Paraná, Nelson Aguinalde, pretendía intimidarlos. Añadieron que Aguinalde amenazó con “matarlos con una ametralladora” si seguían criticando a su gobierno. Indicaron también que, por solicitud del gobernador Aguinalde, los programas de radio conducidos por Bottino y Sánchez fueron censurados y después cancelados debido a que se rehusaron a dejar de criticar al gobernador.

Seguridad nacional y leyes contra la difamación: Con frecuencia, los funcionarios políticos tomaron represalias contra las críticas de los medios de información valiéndose de las leyes contra la difamación y demandando a los medios para intimidar a los periodistas e impedir más investigaciones. Por ejemplo, en 2010, se formularon cargos contra el director del diario *ABC Color*, Aldo Zuccolillo, relacionados con las demandas por difamación presentadas en su contra por exfuncionarios públicos. El 7 de abril, las autoridades le ordenaron pagar 236 millones de guaraníes (\$59.000) más intereses por cuestionar la decisión judicial

que evitó que el expresidente Luis Ángel González Macchi fuera enjuiciado. Al finalizar el año, la apelación seguía pendiente.

### **Libertad de internet**

El gobierno no impuso restricciones al acceso a la internet, ni hubo informes creíbles de que vigilara el correo electrónico ni las salas de chat en la internet. Las personas y los grupos pudieron expresar opiniones por la internet y por correo electrónico.

### **Libertad académica y eventos culturales**

El gobierno no impuso restricciones a la libertad académica ni a los eventos culturales.

#### **b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas**

La ley dispone la libertad de reunión y asociación y, en términos generales, el gobierno respetó estos derechos en la práctica.

#### **c. Libertad de culto**

Consultar el *Informe sobre la libertad religiosa a nivel internacional (International Religious Freedom Report)* publicado por el Departamento de Estado en [www.state.gov/j/drl/irf/rpt](http://www.state.gov/j/drl/irf/rpt) (en inglés).

#### **d. Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y personas apátridas**

La ley establece la libertad de circulación dentro del país, así como de los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación, y en términos generales, el gobierno respetó esos derechos en la práctica. La Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) del gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y demás organizaciones humanitarias para proporcionar protección y asistencia a los desplazados internos, los refugiados, los refugiados que regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas y otras personas afectadas. La ONG Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) fungió como representante legal local de la ONU.

Viajes al extranjero: En ocasiones, las autoridades impidieron que las personas convictas por delitos viajaran al extranjero después de cumplir sus sentencias.

### **Protección de los refugiados**

Acceso a asilo: Las leyes del país disponen la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para ofrecer protección a los refugiados.

Soluciones duraderas: El gobierno permite que las personas a quienes se les deniega asilo o la condición de refugiado obtengan la residencia legal permanente.

Protección temporal: El gobierno también otorgó protección temporal a las personas que no podían ser clasificadas como refugiados.

### **Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno**

La ley confiere a los ciudadanos el derecho de cambiar pacíficamente su gobierno y, en la práctica, los ciudadanos ejercieron este derecho mediante elecciones periódicas, libres e imparciales celebradas según el sufragio universal.

### **Elecciones y participación política**

Elecciones recientes: En las elecciones generales multipartidarias de 2008, Fernando Armindo Lugo Méndez de la Alianza Patriótica para el Cambio ganó la presidencia. Los observadores internacionales consideraron que, en general, estas elecciones fueron libres y justas.

Participación de las mujeres y las minorías: No hubo ningún impedimento legal para la participación de las mujeres en el gobierno y la política. Hubo 17 mujeres en el Congreso (7 de 45 senadores, y 10 de 80 diputados nacionales). De los 39 jueces del Tribunal de Apelaciones, 11 son mujeres. Hubo dos mujeres en la Suprema Corte y una gobernadora de departamento. Una mujer encabezó un ministerio del gabinete, y hubo cuatro mujeres con cargos ministeriales. En las elecciones municipales celebradas en noviembre de 2010 en 238 ciudades, 18 mujeres ganaron alcaldías. La presidencia del partido político más grande del país, el Partido Colorado, estuvo a cargo de una mujer. El código electoral exige que al menos el 20% de los candidatos de cada partido en las elecciones primarias internas del mismo sean mujeres, y se cumplió con este requisito.

Aunque no existió ningún impedimento legal para la participación de las minorías o los indígenas en el gobierno, no hubo indígenas ni miembros de minorías en los cargos de gobernador, ni en el gabinete, el Congreso o la Suprema Corte.

#### **Sección 4. Corrupción oficial y transparencia del gobierno**

La ley establece sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no aplicó la ley con efectividad, y algunos funcionarios en todos los poderes y niveles del gobierno estuvieron a menudo involucrados con impunidad en prácticas corruptas. Según una ley que prohíbe que los casos en los tribunales se prolonguen más de cinco años, los políticos convictos en tribunales menores evadieron de manera rutinaria el castigo presentando apelaciones y solicitudes hasta que transcurrió el plazo de prescripción. Los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno fue un problema grave.

El Ministerio Público, bajo la autoridad del Fiscal General, cuenta con una unidad procesal asignada al combate de la corrupción. Se exige a los funcionarios electos presentar su situación financiera antes de postularse para un cargo público; no obstante, las presentaciones fueron a menudo tardías, incompletas o engañosas. Además, muchos de los funcionarios no dieron a conocer su situación financiera y estuvieron involucrados en prácticas corruptas con impunidad, haciendo uso de la inmunidad política para evitar el enjuiciamiento. En julio de 2010, el Ministerio del Interior, que supervisa a la Policía Nacional, anunció que todos los policías deben presentar una declaración de bienes cada tres años y cuando tengan derecho a un ascenso. No hubo informes de cumplimiento con esta directiva.

Continuó la corrupción entre los 10.000 miembros de las fuerzas armadas. Durante el año, varios de los líderes en las instalaciones principales de las fuerzas armadas reembolsaron dinero que habían extorsionado a sus subordinados.

El caso contra el fiscal suspendido, Gustavo Gamba, a quien se grabó en 2009 cuando recibía del senador Víctor Bernal Garay un pago ilícito de 360 millones de guaraníes (\$90.000 dólares), seguía pendiente después de que la magistratura constitucional de la Corte Suprema falló el 4 de marzo en contra de una solicitud de retirar los cargos.

El excomisario principal y tercero en línea de mando de la Policía Nacional, Eligio Ibarra Hlavasek y el comisario Nery Vera admitieron haber recibido sobornos de

propietarios de negocios a cambio de asignar policías para la seguridad de sus establecimientos. En febrero, se les ordenó pagar 2,4 millones de guaraníes (\$600 dólares) a organizaciones benéficas.

Aun cuando la ley dispone el acceso del público a la información del gobierno, ciudadanos y no ciudadanos, incluidos los medios de información extranjeros, tuvieron acceso limitado a dicha información. La infraestructura insuficiente y los intentos determinados de ocultar la corrupción obstaculizaron el acceso, aunque el gobierno mejoró la transparencia mediante la publicación de información en la internet.

### **Sección 5. Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos**

Más de 50 grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre otros, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el UNICEF, operaron sin restricciones del gobierno, e investigaron y publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Las grandes ONG locales que representan a muchas de las ONG locales de derechos humanos funcionaron con independencia.

Los funcionarios públicos cooperaron con las ONG nacionales y se reunieron con los supervisores nacionales de las ONG, pero a menudo no actuaron en respuesta a sus informes o recomendaciones. Por lo general, el gobierno cooperó con los grupos internacionales de derechos humanos, las ONG humanitarias y las organizaciones internacionales de gobierno, y permitió las visitas periódicas de sus representantes.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: El período de funciones del Defensor del Pueblo Manuel Páez Monges, principal defensor de los derechos humanos en el país, terminó en agosto de 2010, pero siguió en el cargo sin que hubiera ninguna acción aparente para encontrar un sustituto. La Defensoría empleó a aproximadamente 163 abogados y personal de apoyo. Las organizaciones de derechos humanos, las víctimas de la dictadura de Stroessner y varios miembros del Congreso criticaron a Páez Monges por lo que consideraron el manejo incompetente de los casos. Su cargo careció de independencia e iniciativa, no publicó ningún informe importante durante el año ni ha presentado al Congreso ningún informe anual sobre derechos humanos desde 2005.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado hizo viajes frecuentes de inspección al interior del país, pero no ha publicado ningún informe desde 2008.

### **Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas**

La ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social. No obstante, en la práctica, hubo discriminación contra mujeres, personas LGBT e indígenas.

#### **Mujeres**

Violación sexual y violencia doméstica: La ley penaliza la violación sexual, incluida la conyugal, y establece una pena máxima de 10 años de prisión por violación o agresión sexual. Si la víctima es menor de 18 años de edad, las sentencias oscilan entre los 3 y los 15 años. De acuerdo con el Ministerio Público, la violación sexual siguió siendo un problema importante y generalizado. Por lo general, el gobierno llevó a juicio las denuncias de violación y a menudo obtuvo declaraciones de culpabilidad; sin embargo, muchas violaciones no fueron denunciadas por temor al estigma, las represalias o a mayor violencia. En muchos de los casos, la policía no dio prioridad a la investigación de informes de violaciones. En 2010, el Ministerio Público informó de 892 casos de violación.

No se contó con estadísticas oficiales unificadas que dieran seguimiento preciso al número de casos denunciados de violencia doméstica; no obstante, el Ministerio Público registró 1.977 casos de “violencia familiar” en 2010. La ley penaliza la violencia doméstica, incluido el maltrato conyugal y la violencia psicológica, y establece una sanción de dos años de prisión o una multa para quienes son declarados culpables; sin embargo, antes de considerarla un delito, exige que el abuso sea habitual y que el agresor y la víctima estén “cohabitando o compartiendo alojamiento”. Normalmente, se multó a quienes fueron declarados culpables. A pesar del aumento en los informes de violencia doméstica, a menudo, las personas retiraron las quejas poco después de presentarlas, debido a reconciliación con el cónyuge o a presión familiar. En algunos casos de violencia doméstica, los tribunales actuaron como mediadores, pero no hubo estadísticas fiables acerca de los resultados. La violencia doméstica fue muy común, y miles de mujeres recibieron tratamiento por lesiones sufridas durante altercados domésticos; no obstante, el gobierno no hizo mucho por combatir el problema. El sistema 911 para emergencias recibió 16.974 llamadas sobre violencia doméstica en 2009, las cuales generaron sólo 286 denuncias formales a la policía.

En todo el país, la Policía Nacional supervisó seis unidades de violencia doméstica integradas por 30 agentes de policía aproximadamente y coordinadas desde las estaciones de policía en Asunción, Encarnación, Villa Elisa y Villarrica. En 2010, la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República (SMPR) recibió 2.030 denuncias de maltrato doméstico (410 de golpizas, 861 de agresiones psicológicas, 642 de problemas económicos y 117 de abuso sexual).

La SMPR operó en Asunción un albergue para mujeres víctimas de trata de personas y violencia doméstica, e intervino en 1.741 casos en 2010. También coordinó labores de asistencia a las víctimas, campañas de difusión pública y capacitación con la Policía Nacional, las unidades de atención médica, el Ministerio Público y las ONG de mujeres. Las ONG proporcionaron asistencia médica y psicológica, incluso albergue, a las víctimas. La SMPR y el Ministerio Público también impartieron cursos sobre asistencia a las víctimas a la policía, trabajadores de atención de la salud y fiscales.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual y establece una pena de dos años de prisión o una multa; sin embargo, el acoso sexual siguió siendo un problema para muchas mujeres. Los fiscales concluyeron que las denuncias de acoso y abuso sexual eran difíciles de probar, y la mayoría de ellas se resolvieron de manera privada sin intervención de fiscales.

Derechos reproductivos: Las parejas y las personas tuvieron el derecho de decidir el número, el espaciamiento y el momento de concepción de sus hijos, y recibieron la información y los medios para hacerlo, libres de toda discriminación. El gobierno ofreció acceso a información sobre anticonceptivos y asistencia especializada en partos y atención posparto. De acuerdo con las cifras de la ONU para 2008 y 2009, la tasa de mortalidad materna fue de 95 defunciones por cada 100.000 nacimientos vivos, y el 82% de los partos fueron atendidos por personal médico capacitado. Según informes, el 70% de las mujeres entre los 15 y 49 años de edad usaron un método anticonceptivo moderno, a pesar de la prohibición religiosa del control “artificial” de la natalidad. Los servicios de salud reproductiva se concentraron en las ciudades, y hubo deficiencias considerables de cobertura en las zonas rurales. El embarazo de adolescentes siguió siendo un problema. La CODEHUPY especuló que el motivo de las altas tasas de este tipo de embarazos fue que la “educación sexual en los planes de estudio carece de perspectivas acerca de la sociedad laica, de género y de derechos humanos”. Tanto hombres como mujeres tuvieron igualdad de acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Discriminación: Aunque las mujeres gozaron por lo general de la misma condición jurídica y derechos que los hombres, hubo discriminación amplia y profundamente arraigada por motivos de sexo. Con frecuencia, los empleadores pagaron a las mujeres mucho menos que a los hombres por un trabajo similar, y las mujeres tuvieron más problemas para encontrar empleo. Muchas mujeres fueron empleadas como trabajadoras domésticas, secretarías y representantes de servicio al cliente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó de niveles de desempleo del 7% para las mujeres y del 4% para los hombres. Las mujeres en el sector privado perciben en promedio el 73% aproximadamente del pago mensual que reciben sus colegas hombres. La SMPR promovió los derechos de las mujeres y patrocinó programas destinados a dar a la mujer acceso equitativo a empleo, seguridad social, vivienda, propiedad de la tierra y oportunidades de negocio. Su directora a nivel de ministro rinde cuentas directamente al Presidente.

### **Menores de edad**

Registro de nacimientos: La nacionalidad proviene de haber nacido en el territorio nacional, de padres empleados de gobierno que trabajan fuera del país o de padres ciudadanos que residen temporalmente fuera del país. La ciudadanía se transmite a todos los nacionales que cumplen los 18 años y a personas naturalizadas mayores de esa edad.

Maltrato infantil: La información disponible indica que la violencia contra los menores fue generalizada e igualmente predominante entre las familias rurales y urbanas. Con frecuencia, las autoridades no investigaron las denuncias de maltrato infantil. La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) proporcionó fondos al albergue del Grupo Luna Nueva para menores explotados. En Ciudad del Este, la ONG Centro de Asistencia y Atención para niños y adolescentes administró un albergue patrocinado parcialmente por la SNNA, y las instituciones católicas de beneficencia locales operaron varios hogares de niños y orfanatos en lugares diversos. En muchas ciudades, el Consejo Municipal para los derechos de la niñez asistió a los niños víctimas de maltrato y abandono.

Explotación sexual de menores: La explotación sexual de menores, principalmente en la prostitución, fue un problema grave. Según la SNNA, muchos menores fueron obligados a prostituirse o a someterse a servidumbre doméstica para poder sobrevivir, y sufrieron abuso sexual. La ley dispone sanciones máximas de seis años de prisión por la prostitución de víctimas entre los 14 y 17 años de edad, y de ocho años de prisión en el caso de víctimas menores de 14 años. La edad mínima

para relaciones heterosexuales consensuales es de 14 dentro del matrimonio, y de 16 fuera del matrimonio. Aunque existe una ley contra el estupro de menores de 14 años, la pena máxima es una multa a la pareja del sexo opuesto y prisión en el caso de parejas del mismo sexo. La aplicación de esta ley no fue estricta. La pornografía infantil es ilícita. La producción de imágenes pornográficas puede dar lugar a multas o sanciones máximas de tres años de prisión. Las autoridades pueden aumentar la sanción a 10 años de prisión, según la edad del menor y la relación del menor con el agresor.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para obtener información, consultar el informe del Departamento de Estado sobre cumplimiento en [http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport\\_4308.html](http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html) (en inglés).

### **Antisemitismo**

La comunidad judía tiene menos de 1.000 miembros. No hubo informes de actos antisemitas ni de otros abusos sociales o de discriminación por motivos de afiliación, creencias o prácticas religiosas.

### **Trata de personas**

Consultar el *Informe de la trata de personas* publicado por el Departamento de Estado en [www.state.gov/j/tip](http://www.state.gov/j/tip).

### **Personas con discapacidades**

La ley prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades físicas y mentales en el empleo, la educación, el acceso a la atención de la salud o la prestación de otros servicios públicos. La ley no exige la accesibilidad para las personas con discapacidades, y la mayoría de los edificios del país eran inaccesibles para estas personas. Muchas personas con discapacidades fueron objeto de discriminación considerable en el empleo; otras no pudieron buscar trabajo debido a la falta de transporte público accesible. El Ministerio de Educación calculó que al menos la mitad de los niños con discapacidades no asistió a la escuela porque los autobuses públicos no contaban con adaptaciones para ellos. El Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales tiene la responsabilidad de confirmar legalmente la condición de discapacidad.

En marzo, había 686 empleados de gobierno con discapacidades que representaron cerca del 1% de los empleados del sector público. El 23 de febrero, la Junta Municipal de Asunción aprobó un reglamento que establece los requisitos arquitectónicos para la accesibilidad a edificios y aceras, así como las multas por incumplimiento. No existen leyes que garanticen el acceso a la información y a las comunicaciones.

### **Poblaciones indígenas**

La ley concede a las poblaciones indígenas el derecho de participar en la vida económica, social, política y cultural del país; no obstante, el gobierno no siempre protegió efectivamente esos derechos. La discriminación y la falta de acceso a educación, atención médica, albergue y tierras suficientes obstaculizaron la capacidad de los indígenas para avanzar económicamente y mantener al mismo tiempo su identidad cultural. En la práctica, no se respetaron las leyes que protegen los intereses de los indígenas.

El censo de 2008 informó de una población indígena de cerca de 108.000 personas, y calculó que el 39% de los indígenas mayores de 15 años eran analfabetos y cerca del 48% estaban desempleados. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), el ingreso mensual promedio de las poblaciones indígenas en 2008 fue aproximadamente la mitad del salario mínimo de la población no indígena.

Los trabajadores indígenas empleados como peones en estancias ganaron salarios bajos, trabajaron muchas horas, recibieron pagos infrecuentes o ninguna remuneración, y carecieron de prestaciones. La situación fue especialmente grave para los indígenas que trabajaron como peones en las estancias y las fincas de la región del Chaco.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen a su cargo la protección y promoción de los derechos de los indígenas. No obstante, el INDI careció de fondos para comprar tierras en nombre de los indígenas, y les exigió registrarse para solicitar tierras en las oficinas del Instituto ubicadas lejos en Asunción.

La ley autoriza a los indígenas a determinar el uso de sus tierras; esto hizo que muchos de ellos transfirieran o alquilaran sus tierras a personas no indígenas, algunas de las cuales las dedicaron a la captura ilícita de peces o las deforestaron

para cultivarlas. Hubo protección policial y judicial insuficiente contra la usurpación de tierras indígenas, y pocos indígenas poseen títulos de propiedad de sus tierras ancestrales.

### **Abusos sociales, discriminación y actos de violencia por motivo de orientación e identidad sexual**

El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los casos de discriminación; sin embargo, los agentes del gobierno condonaron a menudo la discriminación por motivos de orientación sexual.

Las sanciones por el delito de relaciones sexuales con menores de 14 a 16 años de edad varían según el sexo de la víctima y el autor del delito. Los autores del mismo sexo que sus víctimas quedan sujetas a una sanción máxima de dos años de prisión. La pena máxima para los autores del sexo opuesto es una multa.

No se cuenta con leyes que prohíban explícitamente la discriminación contra personas LGBT en el ámbito del trabajo, la vivienda, la falta de nacionalidad, el acceso a la educación o la atención médica, y se dieron casos frecuentes de todos estos tipos de discriminación, incluso de discriminación social.

### **Otras formas de discriminación o violencia social**

La CODEHUPY señaló que las personas con VIH/SIDA fueron objeto de discriminación e intimidación social en la atención médica, la educación y el empleo.

## **Sección 7. Derechos de los trabajadores**

### **a. Libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva**

La ley permite que los trabajadores de los sectores público y privado organicen sindicatos independientes y se asocien a ellos (con excepción de las fuerzas armadas y la policía) para convocar a huelgas legales y negociar colectivamente. Asimismo, prohíbe la discriminación antisindical. El gobierno no puso restricciones a la negociación colectiva ni exigió aprobación para la validez de los contratos colectivos.

Todos los sindicatos deben estar registrados en el MJT. La ley exige que los sindicatos de los sectores tengan un mínimo de 300 miembros para ser registrados; las normas internacionales consideran excesivo este requisito.

La ley también prohíbe el arbitraje vinculante y las represalias contra los organizadores de un sindicato y los huelguistas. Además, prohíbe la discriminación antisindical; sin embargo, los tribunales no están obligados a reincorporar a los trabajadores despedidos por motivos de actividad sindical.

El gobierno no siempre hizo cumplir efectivamente estas disposiciones. Hubo demoras prolongadas en los procedimientos, mal manejo de casos y supuesta corrupción.

En la práctica, los trabajadores ejercieron la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva. Aunque el proceso de registro oficial de sindicatos fue engorroso, con posibilidad de tardar más de un año, normalmente, el MJT emitió registros provisionales algunas semanas después de la solicitud para permitir la operación de los nuevos sindicatos laborales. En muchos casos, los sindicatos comenzaron a funcionar en la fecha de su registro provisional. Las organizaciones de trabajadores fueron independientes del gobierno y de los partidos políticos.

No obstante, la mayoría de los trabajadores, incluidos los agricultores, ganaderos y empleados del sector informal, no tuvieron acceso a los sindicatos laborales. Muchos de estos trabajadores eran miembros de los movimientos de trabajadores agrícolas. Los trabajadores del sector marítimo y del acero y los empleados de las plantas procesadoras de carne sí recibieron con frecuencia las protecciones legales pertinentes.

El gobierno no logró prevenir las represalias de los empleadores que adoptaron medidas contra huelguistas y líderes sindicales. Los tribunales cumplieron con el debido proceso por medio de mecanismos como el arbitraje voluntario.

En la práctica, hubo discriminación antisindical. Algunos organizadores de sindicatos fueron objeto de hostigamiento y despidos debido a las actividades sindicales. Supuestamente, algunos trabajadores optaron por no protestar por temor a las represalias o previendo la falta de acción del gobierno. Las autoridades arrestaron a tres miembros del sindicato de la planta siderúrgica Acepar y, el 23 de abril, la Corte Suprema declaró que la huelga era ilegal.

#### **b. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio**

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio en todo el país, pero no lo sanciona penalmente. El gobierno no aplicó efectivamente estas leyes, y hubo informes de trabajos forzados en la práctica. También se informó de trabajo infantil forzado (véase la Sección 7.c.).

Los medios de difusión siguieron informando de denuncias de trabajo en servidumbre por deudas, principalmente de hombres pero también de menores de edad, en los estados y estancias de la región del Chaco. Algunos trabajadores indígenas recibieron poca o ninguna remuneración y, supuestamente, contrajeron deudas con sus empleadores, quienes les pagaron por adelantado para cubrir el costo de alimentos y vestido y por enviar a sus hijos a la escuela. Esta situación fue grave para las mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, quienes, según informes, no recibieron compensación por su trabajo y fueron sometidas a maltrato. Hubo algunos informes de trabajo infantil forzado, especialmente en el servicio doméstico (véase la Sección 7.c.). La Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso conformada por el gobierno no ha realizado ninguna acción pública desde su creación en 2009.

Véase también el *Informe de la trata de personas* publicado por el Departamento de Estado en [www.state.gov/j/tip](http://www.state.gov/j/tip).

### **c. Prohibición del trabajo infantil y la edad mínima para trabajar**

La edad mínima para trabajar de manera formal y a tiempo completo es de 18 años. Los adolescentes entre 14 y 17 años de edad pueden trabajar siempre que cuenten con autorización por escrito de sus padres, asistan a la escuela, no trabajen más de cuatro horas al día ni más de 24 horas por semana. Los adolescentes entre 16 y 18 años de edad que no asistan a la escuela pueden trabajar hasta seis horas al día, con un límite de 36 horas por semana. Se prohíbe el trabajo a los menores de 13 años de edad.

El gobierno no hizo cumplir de manera efectiva las leyes que protegen a los niños contra la explotación en el lugar de trabajo. El MJT se encarga de aplicar las leyes que rigen el trabajo infantil, y el Ministerio Público enjuició a los infractores. La Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) colaboró para eliminar la explotación del trabajo infantil mediante concientización, mejoramiento de las protecciones legales y las políticas públicas, y la aplicación de sistemas de supervisión. No obstante, la escasez de recursos limitó la eficacia de estas actividades.

De acuerdo con el Artículo 389 del Código Laboral y el Artículo 257 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la sanción administrativa máxima por dar empleo a un menor de 14 años es de 3,25 millones de guaraníes (cerca de \$812 dólares). Los mismos artículos estipulan que los empleadores que den trabajo a adolescentes entre 14 y 17 años de edad bajo condiciones de peligro pagarán la máxima sanción administrativa de 3,25 millones de guaraníes (cerca de \$812 dólares).

La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) administró el programa Abrazo para ayudar a las familias con hijos en riesgo de trabajar en las calles. Desde su creación, el programa ha asistido a 11.651 menores y familias. La Secretaría de Acción Social administró el programa Tekopora (“Vivir bien”) que pagó a los padres de niños de la calle un estipendio mensual para que enviaran a sus hijos a la escuela. Entre 83.000 y 98.700 familias se han inscrito en el programa Tekopora. Los programas Operación Verano y Operación Invierno de la SNNA llevaron a 920 niños que trabajaban en las calles a albergues en los períodos de vacaciones escolares. También se creó un programa similar destinado a las familias indígenas que ha proporcionado albergue y apoyo a cerca de 564 niños y familias en las comunidades indígenas rurales.

El trabajo infantil fue un problema, especialmente en los sectores de fabricación de ladrillo y en caleras, así como en servicio doméstico y agricultura. Un estudio de la OIT de 2007 indicó que 970.000 (el 53%) de los niños entre 5 y 17 años de edad trabajaron más de una hora al día, y 862.000 trabajaron al menos 14 horas por semana. El estudio no clasificó el trabajo infantil por sector, pero sí informó que la mayor parte del trabajo fue en la agricultura. De agosto a octubre, la SNNA realizó la primera encuesta nacional sobre trabajo infantil, pero los resultados no habían sido publicados al final del año. En las zonas rurales, el 23% de los niños trabajó, en comparación con el 13% de los niños en las zonas urbanas.

Los niños, principalmente varones, trabajaron en los sectores de la manufactura y la agricultura (entre otros, en el cultivo de algodón, frijol, soya, ajonjolí, trigo, maní y stevia), así como en hoteles, restaurantes y el sector del transporte. También trabajaron como vendedores en los mercados. Se calcula que 60.000 menores, principalmente niñas, trabajaron como sirvientas domésticas sin recibir ninguna remuneración. A cambio de trabajo, los empleadores les prometieron habitación, alojamiento y comida, y ayuda económica para la escuela. No obstante, algunos de estos menores fueron víctimas de trabajo forzado, no recibieron ni el salario ni las prestaciones prometidas a cambio de su trabajo,

fueron víctimas en ocasiones de explotación sexual y, a menudo, no tuvieron acceso a la escuela.

Las peores formas de trabajo infantil tuvieron lugar en los casos donde hubo niños mal alimentados, maltratados o abandonados que trabajaron en condiciones insalubres y peligrosas, en la venta de mercancías o servicios en la calle, en fábricas o en la cosecha. También ocurrieron casos de esclavitud y prácticas similares, en particular, en la prostitución y la servidumbre doméstica. Según informes, los padres y tutores vendieron a sus hijos para estos fines, y los menores fueron usados, suministrados y ofrecidos a terceros para actividades ilícitas. Algunos menores trabajaron en el contrabando de drogas en la frontera con Brasil, como parte de grupos delincuentes.

Véase también las *Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil (Findings on the Worst Forms of Child Labor)* del Departamento de Trabajo de los EE.UU. en [www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm](http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm) (en inglés).

#### **d. Condiciones de trabajo aceptables**

El salario mínimo nacional obligatorio fue de alrededor de 1,6 millones de guaraníes (\$400 dólares) por mes, y el ingreso mensual per cápita fue de 970.000 guaraníes aproximadamente (\$243).

La ley dispone una semana de trabajo estándar legal de 48 horas (42 horas en el caso del trabajo nocturno), con un día de descanso. También permite una bonificación anual de un mes de salario, con un mínimo de 12 y un máximo de 30 días de vacaciones al año, según los años de servicio. La ley exige también el pago de tiempo extra cuando el número de horas exceda la norma. No está prohibido el tiempo extra excesivo obligatorio, ni existen excepciones para esos casos. El Código Laboral estipula una multa de 30 días de salario mínimo para los empleadores que paguen salarios inferiores al mínimo.

El gobierno establece las normas de salud y seguridad ocupacional para la protección, la higiene y la comodidad. Los trabajadores tienen el derecho de apartarse de las situaciones de peligro para su salud o su seguridad sin poner en riesgo su trabajo, pero las autoridades no hicieron respetar con efectividad este derecho en la práctica. La ley establece sanciones máximas de tres a cinco años de prisión para quienes empleen personas para trabajos en condiciones peligrosas o las obliguen a trabajar.

Las acciones del gobierno para evitar las infracciones de las disposiciones sobre salario mínimo se limitaron a campañas informativas. El MJT no hizo cumplir de manera efectiva el salario mínimo ni los límites del horario de trabajo en los sectores formal o informal. Tampoco aplicó las disposiciones sobre el pago de tiempo extra, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no hizo cumplir en la realidad los reglamentos de salud y seguridad ocupacional. En 2010, el MJT tenía 30 inspectores en Asunción y nueve en las oficinas regionales.

En julio de 2010, la DGEEC calculó que, en la práctica, el 40% de los trabajadores del sector privado y el 80% de los trabajadores del sector público recibieron el salario mínimo o una remuneración mayor. No obstante, cerca del 42% de la población recibió un salario menor que el mínimo. Muchos empleadores infringieron las disposiciones sobre el pago obligatorio del tiempo extra, en particular, en los servicios de alimentos, el sector agrícola y, según se informó, en el servicio doméstico.

No se contó con datos fiables sobre accidentes en el lugar de trabajo.